



**JUZGADO SETENTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
(JUZGADO 53 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MÚLTIPLE TRANSITORIO ACUERDO PCSJA18-11127)**

Bogotá D.C., julio 13 de 2020

Acción de Tutela N° 2020-0487

Se decide la acción de tutela interpuesta por Valeria Monroy Medina contra Codensa S. A. ESP.

I. ANTECEDENTES

La accionante pretende que, en salvaguarda de su derecho fundamental de petición, se ordene a la demandada resolver de fondo las peticiones de fecha 1 de junio de 2020, mediante la cual solicitó: “1. (...) se realice la aplicación del pago que hice de mi servicio con cuenta contrato 0683866-7 a la cuenta de la tarjeta de crédito a mi nombre. 2. Se me exonere del pago de cobro de intereses de mora, gastos de cobranza y similares, teniendo presente que realice el pago dentro de los plazos acordados, sin embargo, por la aplicación errónea, tengo saldo a favor en el servicio de energía eléctrica y mora en la tarjeta de crédito. 3. Necesito se me informe el valor del pago de mayo, toda vez que tengo dudas en los valores toda vez, que en la cuenta de energía tengo saldo a favor y en la tarjeta de crédito mora, sin tener certeza del monto a pagar. 4. Solicito separen el cobro de mis obligaciones por concepto de tarjeta de crédito con el servicio público de energía eléctrica, el cual pueden enviar a mi correo electrónico o la dirección de notificación de esta petición”.

Adujó que el 6 de mayo del año 2020 realizó el pago de su tarjeta de crédito fácil Codensa, junto con el servicio de energía; sin embargo, el éste solo fue aplicado al segundo concepto quedando en mora el producto financiero, por ello, ha recibido llamadas reiterativas de cobro informándole que dé no realizar el pago puede ser reportada ante las centrales de riesgo. Ante dicho escenario trató de comunicarse vía telefónica con la accionada, quien le informó la dirección electrónica correcta para presentar su reclamación, la cual fue allegada en la segunda data antes mencionada, empero, hasta la fecha no se ha resuelto su situación.

II. DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS

Aduce la accionante la violación de su derecho fundamental de petición.

III. ACTUACIÓN PROCESAL

La presente acción de tutela fue admitida el 6 de julio de 2020 y comunicada a los interesados por medio expedito.

IV. CONTESTACIÓN A LA TUTELA

Codensa S. A. ESP.: Sostuvo que atendió la solicitud presentada por la accionante a través de la comunicación de fecha 3 de junio de 2020, remitida al correo electrónico informado por la interesada, esto es, yma30m@gmail.com, a través de la cual se le indicó que debía adjuntar el soporte documental relacionado, destacando que, dicha entidad celebró un contrato de venta de cartera con el Banco Colpatria, y comoquiera que los hechos descritos en la demanda de amparo ocurrieron con posterioridad a esta cesión procedió a correr traslado del escrito petitorio a dicha entidad.

Scotiabank Colpatria S.A.: Arguyó que atendió el derecho de petición presentado por la accionante a través de las comunicaciones calendadas el 16, 25 de junio y 10 de julio de 2020, a través de las cuales se detalló el estado de cuenta de la obligación, los pagos realizados y la forma como fueron aplicados y a que conceptos, advirtiendo que las facturas de los meses de abril y mayo se encontraban en mora de ahí la destinación respectiva del pago efectuado por la accionante el 6 de mayo de los corrientes, refiriendo carencia de objeto por la configuración de un hecho superado.

V. CONSIDERACIONES

1. De la competencia

Es competente este despacho judicial para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en el artículo 86 constitucional, en armonía con las normas contenidas en el Decreto 2591 de 1991.

2. Naturaleza de la acción constitucional

El Art. 86 de la Constitución Política, ha establecido como mecanismo procesal específico y directo la acción de tutela, para que toda persona pueda reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que los mismos resulten

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre y cuando el afectado, no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que la referida acción se utilice como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable y bajo las condiciones específicamente previstas en el Decreto 2591 de 1991 y de los precedentes jurisprudenciales vigentes, aplicables al caso concreto.

La acción constitucional de tutela no tiene una finalidad distinta a la de buscar la protección de derechos de rango superior cuando éstos se puedan ver lesionados por situaciones de hecho, por actos u omisiones que impliquen su desconocimiento o trasgresión. Por consiguiente, este mecanismo no puede utilizarse para pretender el restablecimiento de derechos que no tienen esta connotación y menos cuando se dispone de otros medios para su reconocimiento puesto que la tutela no constituye un procedimiento alternativo, adicional o complementario para alcanzar fines u objetivos diferentes para los cuales fue instituida.

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho de petición, en el cual se establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.

Al precisar el sentido y alcance de dicho mecanismo, la Corte Constitucional sintetizó en la sentencia T-489 de 2014, que la respuesta que se dé al peticionario debe cumplir al menos, con los siguientes requisitos *i) ser oportuno ii) resolver de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, iii) ser puesta en conocimiento del peticionario (...)*

Por lo anterior, *“la respuesta no implica aceptación de lo solicitado”*¹.

Con relación a la oportunidad de la respuesta, por regla general, la ley ha establecido un término perentorio dentro del cual debe darse solución a las diferentes peticiones elevadas por los peticionarios. En el evento de no ser posible proveerla en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

En este sentido el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, -Estatutaria del Derecho de Petición-, haciendo referencia a los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones, bien ante autoridades públicas o bien frente a organizaciones e instituciones de carácter privado (artículo 32 de la misma ley), establece en su tenor literal, lo siguiente: *“...Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición*

¹ Sentencia T-077de 2018.

deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: “1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

(...)

“Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto...”

Por otra parte, ha sido reiterada la jurisprudencia en señalar que, la acción de tutela, en principio, *“pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”*².

La Corte Constitucional al referirse a la carencia actual del objeto por hecho superado, indicó que ésta se abre paso cuando:

*“...entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir.”*³

² Sentencia T-970 de 2014.

³ Sentencia SU225 de 2013.

3. Problema jurídico

Corresponde determinar si se vulneró el derecho de petición de la accionante y de ser así establecer si la vulneración aún persiste.

4. Caso concreto

En el *sub-lite*, se encuentra acreditado que el 1 de junio de 2020, la accionante, formuló derecho de petición ante Codensa S. A. ESP., en el que peticionó: “1. (...) se realice la aplicación del pago que hice de mi servicio con cuenta contrato 0683866-7 a la cuenta de la tarjeta de crédito a mi nombre. 2. Se me exonere del pago de cobro de intereses de mora, gastos de cobranza y similares, teniendo presente que realice el pago dentro de los plazos acordados, sin embargo, por la aplicación errónea, tengo saldo a favor en el servicio de energía eléctrica y mora en la tarjeta de crédito. 3. Necesito se me informe el valor del pago de mayo, toda vez que tengo dudas en los valores toda vez, que en la cuenta de energía tengo saldo a favor y en la tarjeta de crédito mora, sin tener certeza del monto a pagar. 4. Solicito separen el cobro de mis obligaciones por concepto de tarjeta de crédito con el servicio público de energía eléctrica, el cual pueden enviar a mi correo electrónico o la dirección de notificación de esta petición”.

De igual forma con la contestación brindada por la accionada, fue debidamente probado que la petición presentada por la actora fue atendida a través de las comunicaciones calendadas el 16, 25 de junio y 10 de julio de 2020, a través de las cuales se le puso en conocimiento el estado de la obligación a su cargo y la forma como fue aplicado el pago del 6 de mayo de los corrientes, y a que conceptos, destacando que presentaba mora respecto de las facturas de los meses de abril y mayo de la presente anualidad.

Téngase en cuenta además que, dicha misivas fueron notificadas a la querellante a través del correo electrónico yma30m@gmail.com, informado por la interesada en la petición.

Aunado a lo anterior, este despacho procedió a comunicarse vía telefónica con la accionante Valeria Monroy Medina, quien manifestó que la enjuiciada resolvió de fondo lo pretendido en punto de la exigencia planteada.

Así las cosas, se evidencia que la accionada dio respuesta a la petición que la actora remitió por correo electrónico el 1 de junio de 2020, por lo que habrá de darse aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, que a su tenor literal señala:

“CESACION DE LA ACTUACION IMPUGNADA. Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si

fuereen procedentes. El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente. Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía”.

En este estado de cosas es patente aseverar que la pretensión elevada por la accionante se encuentra satisfecha, luego se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes del presente fallo por lo que no se evidencia vulneración o amenaza a prerrogativa fundamental alguna.

Conforme lo anterior y al desaparecer el objeto jurídico de la acción tutelar, se negará el amparo implorado, por hecho superado.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá, convertido transitoriamente a Juzgado 53 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, mediante Acuerdo PCSJA18-11127, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: DENEGAR el amparo constitucional promovido por **VALERIA MONROY MEDINA**, contra **CODENSA S. A. ESP.**, por haber cesado la causa que diera origen a la presente acción de amparo.

Segundo: Comuníquese esta decisión a los interesados y, de no ser impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



ROCIO CECILIA CASTILLO MARIÑO
JUEZ